

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-003-2019-00253-01.
DEMANDANTE:	ANA ESPERANZA MARTINEZ DE RIVERA oscar ivan montoya@hotmail.com
DEMANDADO:	HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO DE PALMIRA- VALLE juridica@hrob.gov.co
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA QUE RECHAZÓ LA DEMANDA POR CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio Nro. 1215 del 19 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali, que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Ana Esperanza Martínez Gordillo, por considerar que se configura el fenómeno de la caducidad del presente medio de control.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Ana Esperanza Martínez Gordillo a través de apoderado judicial demandó al Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira y solicitó¹ la nulidad de:

- La Resolución nro.0588 del 01 de agosto de 2018², por medio de la cual el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira reconoció y pagó a la señora Ana Esperanza Martínez Gordillo unas prestaciones sociales definitivas.

A título de restablecimiento del derecho solicitó, se ordenara reconocer y pagar la sanción moratoria de que trata el artículo de la Ley 50 de 1990, por el no pago oportuno de las cesantías correspondientes a los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2003.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 1215 del 19 de noviembre de 2019³, el Juzgado Tercero Administrativo rechazó la demanda, argumentando lo siguiente:

¹Ver folio 1

² Ver folio 18

³ Ver folio 29-30



“Al respecto se debe indicar, que a pesar de que el acto administrativo demandado reconoce y ordena pagar unas prestaciones periódicas definitivas, esta se encuentra sujeto al fenómeno jurídico de la caducidad, en tanto lo pretendido es la sanción moratoria por el pago o consignación tardía de unas cesantías, entendiéndose entonces que no realiza un reconocimiento de una prestación periódica, la cual sí está exenta de caducidad.

Sin entrar a considerar si la Resolución No. 0588 del 1 de agosto de 2018 (fl. 8), es o no el acto administrativo a demandarse, en tanto se considera que la parte actora debió provocar el pronunciamiento negativo de la administración del HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO ESE en torno al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías correspondientes a los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, lo cierto es, que como este es el acto administrativo del cual se decreta su nulidad, ha de establecerse si la demanda fue incoada a tiempo.

Al respecto se observa, que la demandante elevó derecho de petición el día 18 de octubre de 2018 ante el HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO E.S.E y en él hizo mención a la Resolución No. 0588 del 1 de agosto de 2018, pues así se deriva del oficio de respuesta visible a folio 19 del informativo, lo que le permite inferir que ya conocía el contenido del acto administrativo demandado, entendiéndose notificado por conducta concluyente, por ende, si empieza a contabilizar el término de caducidad a partir del día siguiente (19 de agosto de 2018), se establece que la parte actora tenía como plazo máximo para interponer la demanda hasta el 19 de diciembre de 2018.

Este plazo fue interrumpido con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial el día 12 de diciembre de 2018 (fl. 21), es decir, cuando faltaba 8 días para que operara el fenómeno de la caducidad, reanudándose al día siguiente a la expedición de la constancia de no conciliación de fecha 8 de marzo de 2019 (fl. 21), para lo que la demanda debía interponerse máximo hasta el 21 de marzo de 2019, verificándose que la misma se presentó el 29 de abril de 2019 (fls. 10 y 22), cuando ya había operado el mencionado fenómeno.

En síntesis, verificado como está que la demanda fue presentada por fuera del término consagrado en el numeral 2º, literal d) del artículo 164 del CPACA, lo cual impide constituir válidamente la relación jurídico- procesal, resulta necesario rechazar la demanda.”

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante, presentó recurso de apelación argumentando lo siguiente⁴:

“ ...

“De acuerdo a lo anterior el acto administrativo objeto de demanda, Resolución No. 588, de fecha Agosto 1 de 2018, notificado a la señora ANA ESPERANZA MARTÍNEZ GORDILLO, el día 4 de Septiembre de 2018, no ha sido objeto de caducidad, como lo establece la señora Juez de primera instancia, por tratarse de un acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas de las cesantías y sus intereses, así mismo al contrario de lo que en el auto objeto de impugnación, la notificación del mencionado acto administrativo no se realizó por conducta

⁴ Ver folio 31-36



concluyente el día 18 de octubre de 2018, por el hecho de elevar un derecho de petición sino, el día 4 de septiembre de 2018.

El Código de Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece en sus artículos 66, 67, 68, 69 las normas que regulan la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto como sucede en el caso que nos ocupa, y en ninguna de ellos se indica que opera la notificación por conducta concluyente, ya que de acuerdo a las normas en mención dichos actos administrativos se notificaron personalmente y por aviso en ningún momento por conducta concluyente.

“... ”

“De acuerdo a lo anterior, por tratarse de un acto administrativo como es la Resolución No. 88588 de fecha agosto 1 de 2018, notificada a la demandante el día 4 de septiembre de 2018 de manera personal, que reconoce la prestación periódica de las cesantías y sus intereses, encontrándose vigente la sanción que se reclama por no pago oportuno de estas prestaciones periódicas correspondientes a los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2003, no ha operado al contrario de lo que señala la señora Juez de primera instancia el fenómeno de la caducidad.

“... ”

V. CONSIDERACIONES:

5.1 Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación incoado contra la providencia de primera instancia.

Además, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

“Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

“... ”

5.2 PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

¿Frente a la Resolución 588 del 1 de agosto del 2018 proferida por el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, operó o no la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

5.3 TESIS

Se revocará la providencia apelada, toda vez que en el presente asunto no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad y



restablecimiento contenido en el literal d) del artículo 164 del CPACA.

Para arribar a la anterior decisión, se realizará: i) un recuento normativo y jurisprudencial acerca del fenómeno jurídico de la caducidad, ii) La naturaleza de las prestaciones periódicas y, iii) Definirá al caso concreto.

5.4 CADUCIDAD – RECUENTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL:

Para resolver, se tiene que, la caducidad es uno de los llamados presupuestos procesales del medio de control, esto es, uno de aquellos requisitos que se deben acreditar, ab initio, para que se pueda instaurar la demanda. Dichas exigencias, por regla general, deben ser verificadas en la primera etapa del proceso, es decir, en el momento del estudio para la admisión en la medida en que se debe propender por un control temprano del proceso.

El artículo 138⁵ del CPACA consagra el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA, en relación con la oportunidad para presentar la demanda del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, previó:

*“**Artículo 164.** Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:*

(...)

***2.** En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:*

(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.;

(...)”

Esta institución jurídica se estableció por el Legislador como una forma de lograr la seguridad jurídica que propende por el interés general, la cual es de obligatoria observación y aplicación por el juzgador al momento de admitir la demanda.

Respecto de la caducidad, el Consejo de Estado en reciente jurisprudencia manifestó⁶:

“(…) 18. En primer lugar, es preciso señalar que la caducidad ha sido definida por la doctrina como «un fenómeno procesal en virtud del cual, por el solo transcurso del tiempo sin que se haya hecho de uso de la acción judicial, se pierde para el administrado, la posibilidad de demandar el acto administrativo en la vía

⁵ “**ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.** Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, **dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.** Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

⁶ Consejo de Estado, Sección segunda-Subsección B, M.P.Sandra Lisset Ibarra Vélez, providencia del 02 de mayo de 2019, radicación 08001-23-33-000-2017-01129-01(5192-18).



jurisdiccional.»⁷ De tal manera, para su ocurrencia, solo se requiera la concurrencia de dos supuestos: el transcurso del tiempo y la omisión en el ejercicio de la acción.

19. La Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001⁸, al resolver una acción pública de inconstitucionalidad por la cual se demandó parcialmente el numeral 9° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en lo relativo a la caducidad, esa corporación indicó que dicho fenómeno jurídico fue contemplado por el legislador por razones de seguridad jurídica e interés general, en los siguientes términos:

« [...] La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.»

(...)21. De lo anterior, se tiene que la demanda ejercida a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es oportuna cuando se presenta dentro del término de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo acusado, según el caso, salvo las excepciones establecidas en la ley⁹(...)”

5.5 PRESTACIONES PERIODICAS – CESANTÍAS

Ahora bien, el artículo 164 del CPACA establece que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, es decir no atiende términos de caducidad, en los siguientes términos:

“1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

c) Se dirija contra **actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas**. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

(Destaca la Sala).

El Consejo de Estado¹⁰, ha resuelto la incógnita frente al carácter de prestación periódica que pueden ostentar las cesantías y ha manifestado

⁷ PALACIO HINCAPIÉ, Juan Carlos. *Derecho Procesal Administrativo*. Novena edición. Ed. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. Enero de 2017. PP. 137.

⁸M.P. Rodrigo Escobar Gil.

⁹«ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada: 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;

(...)»

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación número: 25000-23-42-000-2017-05670-01(1553-18).



que por regla general cuando se solicita el reconocimiento de prestaciones sociales, están pueden ser demandadas en cualquier tiempo, y para el caso de las cesantías, pueden ser debatidas judicialmente en cualquier tiempo cuando el vínculo laboral se encuentre vigente, ya que al culminar se pierde el pago periódico, caso en el cual, si opera el término de 4 meses para acudir a la jurisdicción contencioso. De manera textual expuso:

“...Esta Sección¹¹ como regla general ha entendido que las reclamaciones de naturaleza laboral, tratándose de solicitudes de acreencias periódicas, no están sujetas al término de caducidad de 4 meses previsto para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando quien pretenda su pago tenga vigente el vínculo laboral con la entidad que pretende demandar, pues finalizada la relación laboral, ya no reviste la connotación de periodicidad del pago y, en esa medida, su exigibilidad vía judicial está sometida al término preclusivo de cuatro meses que trae el artículo 164 del CPACA.

Por esta regla general se han decidido asuntos relativos a las cesantías definitivas¹², en donde se señaló que al haberse terminado el vínculo laboral con la entidad demandada, las reclamaciones sobre esa prestación de ninguna manera revisten el carácter de periódico y bajo ese entendido, debía observarse para la presentación del medio de control el término de 4 meses, al tratarse claramente de cesantías definitivas.

Lo anterior quiere decir que cuando la discusión se hace en torno a las cesantías parciales, esto es, cuando la vinculación laboral de quien reclama el auxilio se encuentra vigente, se trata de prestaciones periódicas, pues la naturaleza unitaria de la prestación se da una vez ha culminado el vínculo laboral.

Con respecto a la pretensión de pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las Cesantías, el Consejo de Estado determinó que dicho reclamo no constituye una prestación periódica y, por tanto, está sometido al término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al respecto dijo:

*“...Lo pretendido en la acción de nulidad y **restablecimiento del derecho es la sanción moratoria de las cesantías que se cancelaron tardíamente, no siendo la citada sanción una prestación periódica**, por ende la misma no es susceptible de ser demandada en cualquier tiempo de acuerdo con el artículo precedente. **En consecuencia, a este tipo de controversias se aplica el término de caducidad de los 4 meses contados a partir del día siguiente a la publicación del acto demandado.** Se evidencia que con la solicitud del 24 de julio de 2006 formulada por parte de la señora Delcy Solano Pacheco ante la entidad demandada para pedir la indemnización moratoria, se busca revivir un término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De lo anterior es forzoso concluir, que en el presente caso, la solicitud del 24 de julio de 2006 formulada por parte de la señora Delcy Solano Pacheco, ante la entidad demandada para pedir la indemnización moratoria, se pretendió revivir términos que ya se encontraban claramente precluidos, lo cual vulnera los principios de seguridad jurídica, de legalidad y del*

¹¹ Radicado: 05001-23-33-000-2013-00262-01(3639-14) y ver entre otros, los autos de 8 de septiembre de 2017, radicación: 76001-23-33-000-2016-01293-01 (4218-2016) y del 4 de septiembre de 2017, radicación: 76-001-23-33-000-2014-00498-01. (3751-2014).

¹² Ver por ejemplo, auto de 12 de abril de 2018, radicación: 17001-23-33-000-2015-00581-01(2030-2016).



*debido proceso. Por tanto, en el presente proceso operó el fenómeno de la caducidad de la acción.*¹³ (Negritas fuera del texto)

5.5 CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320¹⁴ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306¹⁵ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose **solamente** sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Para iniciar, el Despacho considera que teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada en precedencia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la señora Ana Esperanza Martínez Gordillo, sí es susceptible de caducidad del medio control, lo cual se procederá a explicar de acuerdo con el caso concreto:

El Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira a través de la Resolución nro. 0588 del 01 de agosto de 2018¹⁶ reconoció y pagó a la señora Ana Esperanza Martínez Gordillo, unas prestaciones sociales definitivas, dentro de las que se encuentran las cesantías, ya que prestó sus servicios como auxiliar área de salud hasta el 31 de julio de 2018.

De lo anterior, se desprenden las siguientes conclusiones: 1) que la relación laboral que tenía la demandante con el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira ya feneció y, en consecuencia, el medio de control de la referencia debe interponerse dentro del término establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y 2) como lo expuso el Consejo de Estado en la sentencia relacionada en el acápite 5.4 de la presente providencia, la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no es una prestación periódica, por lo tanto, no puede demandarse en cualquier tiempo.

En vista de lo anterior, la Sala analizará si en el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado.

La caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ocurre cuando éste no se ejerce dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que se efectuó la comunicación, notificación,

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: Dr. Gabriel Valbuena Hernández. Sentencia del 22 de septiembre de 2016, bajo el radicado número 13001-23-31-000-2007-00198-01.

¹⁴ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

(...).

¹⁵ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

¹⁶ Ver folio 18



ejecución o publicación del respectivo acto. En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

- El 1º de agosto de 2018 el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, a través de la Resolución Nro. 0588¹⁷ reconoció y pagó a la señora Ana Esperanza Martínez Gordillo, unas prestaciones sociales definitivas, dentro de las cuales están las cesantías.
- El 13 de octubre de 2018, el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, emitió el Oficio Nro. 144.42.1.13¹⁸ a través del cual da respuesta al derecho de petición presentado por la parte demandante el 18 de octubre de 2018, y negó el pago de la sanción moratoria, aduciendo que dicho derecho se encuentra prescrito.
- De la constancia expedida por la Procuraduría 166 Judicial II para asuntos administrativos de Cali el 8 de marzo de 2019, se observa: 1) el 12 de diciembre de 2018, se presentó solicitud de conciliación prejudicial y 2) la audiencia de conciliación prejudicial fue llevada a cabo el 8 de marzo de 2019, y se declaró fallida tal y como se desprende del numeral 3 de la respectiva constancia¹⁹.

Observa la Sala, que el apoderado de la parte demandante sólo se limitó a demandar la Resolución Nro. 0588 del 1º de agosto de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA Y RECONOCE EL PAGO DE UNAS PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS”, omitiendo que a través de un derecho de petición presentado el 18 de octubre de 2018, provocó el pronunciamiento negativo de la entidad demandada, ya que le negó el pago de la sanción moratoria solicitada a través del Oficio Nro. 144.42.1.13 del 13 de octubre de 2018, aspecto que debe ser subsanado de no encontrarse el presente asunto caducado.

Por tanto, en aras de garantizar el debido proceso se tomará la fecha de expedición de dicho oficio para efectuar el cómputo del término de caducidad, teniendo en cuenta que no se allegó la constancia de notificación.

Así entonces, tenemos que en el presente asunto el acto administrativo contenido en el Oficio Nro. 144.42.1.13 fue expedido el 13 de octubre de 2018, y como el medio de control que se instaura caduca en cuatro (4) meses, se logra establecer que la fecha límite para instaurar la demanda era el día 14 de febrero de 2019.

Sin embargo, dos meses y dos días²⁰ antes de esta fecha, se presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 166 Judicial II para asuntos administrativos de Cali, solicitud que suspende el término de caducidad hasta el día 8 de marzo de 2019, fecha en la cual se expidió la constancia de la realización de la diligencia de conciliación prejudicial, la cual resultó fallida.

¹⁷ Ver folio 18

¹⁸ Ver folio 19

¹⁹ Ver folios 21

²⁰ 65 días



A partir de la fecha en precedencia, el actor contaba con dos (2) meses y dos (2) días, que le restaban al momento de presentar la solicitud de conciliación para instaurar la respectiva demanda administrativa, es decir, que tenía hasta el día 4 de junio de 2019²¹ para demandar en tiempo.

En este orden de ideas, encontramos visible a folio 10, que obra constancia de la oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali Sección de Reparto, la cual muestra que el presente medio de control fue radicado el día 29 de abril de 2019, coligiéndose así que no ha operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el término para interponerla vencía el 4 de junio de 2019.

De allí que, no ha operado la caducidad, todo ello según lo ordenado en el numeral 2, literal d, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011-CPACA-, y por tanto, el auto interlocutorio Nro. 1215 del 19 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali, debe ser revocado.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto No. 1215 del 19 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali.

SEGUNDO: Ejecutoriado el presente auto envíese al despacho de origen para que continúe con el trámite pertinente.

Aprobada en Sala y Acta de la fecha. Acta No. **066**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados


FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

²¹ Toda vez que el 1 de junio fue sábado, el 2 domingo y el 3 lunes festivo.

Radicación : 2019-00253-01
Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante : Ana Esperanza Martínez Gordillo
Demandado : Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira – Valle



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

JHON ERICK CHAVES BRAVO